

5757 *ORDEN de 31 de enero de 1991 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 2.664/1987, promovido por doña Dolores Rodríguez-Carretero Sánchez.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 12 de mayo de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 2.664/1987, en el que son partes, de una, como demandante, doña Dolores Rodríguez-Carretero Sánchez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 22 de enero de 1987, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 7 de octubre de 1986, sobre concurso de traslados.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Dolores Rodríguez-Carretero Sánchez, contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de enero de 1987, desestimatoria de la reposición entablada contra la Resolución de adjudicación definitiva de destino en concurso de traslados convocado para proveer puestos de trabajo de nivel D, debemos declarar y declaramos tal Resolución conforme con el ordenamiento jurídico; no se hace especial imposición de las costas procesales causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

5758 *ORDEN de 31 de enero de 1991 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo 801/1988, promovido por doña María del Carmen Burgos Villarino.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha dictado sentencia, con fecha 30 de octubre de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 801/1988, en el que son partes, de una, como demandante, doña María del Carmen Burgos Villarino, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 27 de mayo de 1988, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 15 de abril de 1988 sobre denegación de la pensión de orfandad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que, estimando parcialmente la pretensión deducida por doña María del Carmen Burgos Villarino contra la Administración del Estado, anulamos, por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, tanto la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) de 25 de abril de 1988, que denegó a la actora una pensión de orfandad, como la de la Dirección General de Servicios del Ministerio para las Administraciones Públicas de 30 de mayo del mismo año, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, y declaramos que procede la remisión del expediente incoado, a causa de la petición de la demandante, al Ayuntamiento de Villalpando (Zamora) para que éste se pronuncie sobre la misma. No hacemos especial condena en las costas de este proceso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;

17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

5759 *ORDEN de 31 de enero de 1991 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 2.848/1988, promovido por don Eduardo Molina Martínez.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 22 de mayo de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 2.848/1988, en el que son partes, de una, como demandante, don Eduardo Molina Martínez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 20 de junio de 1988, sobre escalafones de funcionarios de Administración Local.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimamos el recurso formulado por don Eduardo Molina Martínez contra la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, la que procederá a una nueva totalización de la puntuación otorgada al actor en el escalafón elevado a definitivo por Resolución de 20 de junio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» número 154, del 28), de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, cerrado el 31 de marzo de 1988, computando y valorando como comprendidos en el anexo II, apartado I A del baremo de méritos, tanto el periodo de 1 de agosto de 1963 a 3 de febrero de 1968 que prestó servicios previos como Interventor Habilitado del Ayuntamiento de Cazorla (Jaén), como el periodo de 3 de octubre de 1972 a 15 de junio de 1973, la que como funcionario en prácticas realizó el Curso de Habilitación en la Escuela Nacional de Administración Local una vez superadas las pruebas de acceso a la subescala a que pertenece. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

5760 *ORDEN de 31 de enero de 1991 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo 1.090/1987, promovido por don José Manuel Negro Manrique.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 1.090/1987, en el que son partes, de una, como demandante, don José Manuel Negro Manrique, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.